

Felipe González esperará una semana para decidir si acepta la dimisión presentada por el vicepresidente, Narcís Serra, y el ministro de Defensa, Julián García Vargas. González quiere tener primero el resultado de la investigación que ha abierto el propio Ejecutivo para determinar quienes y por qué razones captaron en el Cesid las conversaciones telefónicas, robaron las cintas y las

difundieron posteriormente, antes de determinar si de estos hechos se derivan responsabilidades políticas en el Gabinete. González está convencido de que se ha pretendido utilizar esta información para «echar un pulso» al Gobierno, motivo por el cual reclamó a su grupo parlamentario «cohesión». Las peticiones de cambio de Gobierno quedaron reducidas a una minoría de guerristas.

Las peticiones de depuración por el 'caso Cesid', lideradas por los guerristas, quedaron en minoría en el grupo parlamentario

González desafía a los críticos y retrasa los cambios en el Gobierno

S. OLMO, Madrid

GONZÁLEZ expuso ayer ante el grupo parlamentario socialista su teoría de que la grabación y posterior difusión de las conversaciones telefónicas captadas por el Cesid obedecen a una conspiración contra el Ejecutivo, destinada a apartar al actual equipo gubernamental con métodos «no parlamentarios».

Por eso, la investigación interna que se está llevando a cabo, dirigida por el vicepresidente Narcís Serra con la colaboración del ministro de Defensa y del dimitido director del Cesid, general Alonso Manglano, tiene como objetivo determinar quién y por qué razón intervino las conversaciones telefónicas, sustrajo después las grabaciones de los archivos del Cesid y por último las difundió.

El jefe del Gobierno no mencionó nombres concretos cuando habló de la supuesta conspiración, pero tanto en su intervención ante el grupo socialista como en la rueda de prensa que ofreció a continuación, subrayó que «hay gente que quiere utilizar este tipo de información en una especie de pulso al Gobierno».

«El Ejecutivo —añadió— puede aceptar todos los pulsos que se le echen a nivel parlamentario o en unas elecciones generales, pero no puede, lógicamente, dejar de reaccionar ante pulsos que se escapan de esos carriles democráticos. Siempre he creído que la estabilidad política es un factor fundamental y que hay que defender el Estado democrático



EFE

Las palabras del secretario general del PSOE fueron un bálsamo para su grupo parlamentario.

El presidente del Ejecutivo reclama cohesión interna ante los «pulsos que se escapan de los carriles democráticos»

frente a cualquier pulso», dijo.

Otros diputados que intervinieron en el debate fueron más precisos que González al señalar quienes podrían estar detrás de ese supuesto «pulso» contra el Gobierno. Luis Yáñez, que llevó la voz cantante del sector renovador, habló de una «trama involucionista» que estaría organizada «en torno a Mario Conde, Antonio García Trevijano, José

Amedo y el diario *El Mundo* y abogó porque se averiguen las conexiones que puede haber entre estas personas.

González destacó que la investigación encargada por el Gobierno, que no interfiere en la que llevan a cabo los jueces y fiscales, debe concluir «en el plazo más breve posible». Aseguró que el proceso está ya «muy avanzado» y anunció que «en

pocos días» se podrán tener resultados. «Entonces discutiremos las responsabilidades políticas y nadie puede excluirse de antemano», añadió el jefe del Gobierno, quien no quiso adelantar cuáles son los planes que baraja.

Tampoco lo hizo ante sus compañeros de grupo, a los que informó tan sólo que había pedido a Serra y García Vargas, cuando presentaran su dimisión, que esperaran hasta que concluyera la investigación. «Nunca me pronuncio por anticipado sobre si va a haber cambios o no —dijo—. Las

responsabilidades políticas las asumiremos en la medida que creamos que se corresponden con los hechos».

Los guerristas, solos

Felipe González insistió en que el Ejecutivo no conoció hasta su publicación las escuchas del Cesid. La intervención del secretario general del PSOE ante su grupo parlamentario, que concluyó con una llamada a la cohesión interna y a la solidaridad de los diputados con el Ejecutivo, tuvo un efecto balsámico y las críticas que la semana anterior habían hecho parlamentarios socialistas de todas las tendencias, exigiendo cambios en el Gobierno, quedaron reducidas a una minoría.

A ello contribuyó también la labor apaciguadora del presidente del grupo, Joaquín Almunia, que la víspera había hecho un llamamiento al sosiego con llamadas telefónicas personales para evitar intervenciones airadas.

Enrique Múgica, Francisco Fuentes y Matilde Fernández, y los críticos Manuel de la Rocha y Fernando Morán, reprocharon la atonía del Gobierno en los últimos meses e insistieron en que este último escándalo exigía la asunción de responsabilidades en el Gabinete. A modo de respuesta a estas intervenciones, el renovador Luis Yáñez lamentó las «reacciones nerviosas» que se produjeron en el grupo la semana pasada y abogó por continuar en la línea tradicional del PSOE, «con un grupo sólido, cohesionado y con solidaridad interna». Posteriormente tuvo un altercado con Marugán.

Manglano reconoce que ordenó las escuchas

EFE, Madrid

El director en funciones del Cesid, Emilio Alonso Manglano, reconoció en su declaración ante el fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, haber ordenado la interceptación y grabación de conversaciones por el servicio de inteligencia español.

Según fuentes fiscales, Manglano defendió durante su declaración de ayer ante el fiscal jefe de Madrid que en todo momento había actuado pensando que se encontraba dentro de la legalidad. Las fuentes explicaron que el fiscal togado militar está actuando en la investigación de la posible comisión de un delito contra la seguridad o la defensa nacional por parte del ex jefe de ope-

raciones del Cesid Juan Alberto Perote, con un material diferente al que maneja la fiscalía de Madrid. La fiscalía estudia ahora los pasos a seguir y si pide nuevas diligencias.

En primer lugar analiza el contenido de la querrela presentada por Jaime Campmany, director de la revista *Epoca*, contra Manglano, por un supuesto delito de interceptación y grabación de comunicaciones. Esta querrela ha correspondido a la jueza María Jesús Coronado, titular del juzgado número 43 de la Plaza de Castilla y, previsiblemente, hoy será admitida a trámite por la magistrada. Al iniciarse una investigación judicial, los fiscales deben cesar en la suya si versa sobre los mismos hechos.

El presidente responde hoy después de Serra

EFE, Madrid

El presidente del Gobierno, Felipe González, responderá hoy ante el pleno del Congreso a tres preguntas formuladas por representantes de los grupos socialista, popular y de Izquierda Unida en relación con las escuchas del Cesid. Las preguntas se formularán al término de la comparecencia del vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, ante el pleno de la Cámara Baja para informar sobre el mismo asunto. Serra comparece a las tres de la tarde, hora canaria. La cuestión planteada por el grupo popular será defendida por el secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, quien pedirá a González que explique si considera

que tiene alguna responsabilidad política en la «acumulación de escándalos» como las escuchas del Cesid y los casos Roldán y Rubio. Por parte de Izquierda Unida-IC, será el presidente de Iniciativa per Catalunya, Rafael Ribó, quien se interesará por saber si «después de los últimos acontecimientos que han tenido lugar en torno a las escuchas del Cesid, cree el presidente del Gobierno que con la salida del vicepresidente y del ministro de Defensa del Ejecutivo se depuran las responsabilidades políticas de este caso».

Joaquín Almunia, portavoz del grupo socialista, preguntará a González «si reitera, a raíz de las últimas investigaciones, lo expresado por Narcís Serra.

La oposición denuncia la «tomadura de pelo»

EFE, Madrid

Todos los grupos presentes en la Junta de Portavoces del Congreso salvo el PSOE se mostraron partidarios ayer de que fuera el propio jefe del Ejecutivo quien compareciese hoy, pese a lo cual no vetaron la presencia de Serra en el Pleno. Todos los portavoces de la oposición, salvo los del PSOE y CiU, acusaron a González de retrasar su comparecencia para eludir sus propias responsabilidades y aparecer ante el Congreso con la dimisión de Serra y el ministro de Defensa, Julián García Vargas, para dar por cerrado el caso Cesid.

Rodrigo Rato, del PP, criticó lo que en su opinión no es más que un intento más de Felipe González

para «interponer entre él y sus responsabilidades las carreras políticas de sus colaboradores». «González va a utilizar —continuó— el mismo truco de siempre: Yo no supe nada, me enteré por los periódicos, la culpa es de estos y estos dimiten».

Por su parte, Rosa Aguilar calificó de «tomadura de pelo al Parlamento» el hecho de que vaya a comparecer ante la Cámara Narcís Serra quien, a su juicio, «está políticamente acabado», aunque destacó el hecho de que los grupos parlamentarios «fuerzan a Felipe González a dar explicaciones».

Joaquín Molins, portavoz parlamentario de CiU, se mostró satisfecho con el hecho de que González vaya a comparecer.